



Extrait du Viento Sur

<http://www.vientosur.info/spip.php?article7727>

Estado español

Febrero, un mes de luchas y acontecimientos

- solo en la web -

Date de mise en ligne : Miércoles 27 de febrero de 2013

Viento Sur

El mes de febrero ha sido pródigo en acontecimientos que parecen marcar un punto de no retorno en la crisis del régimen.

La lucha contra los desahucios

Primero fue la admisión a trámite de la ILP para el establecimiento de la dación en pago promovida por la PAH y que ha llegado al parlamento con más de 1,3 millones de firmas. La decisión a última hora del PP de votar a favor de esta admisión refleja a las claras la preocupación de sus dirigentes ante las dimensiones de protesta y deslegitimación que sus políticas están generando en sectores cada vez más amplios de la sociedad española.

Es claro que, en el procedimiento de tramitación de la iniciativa, el PP pondrá todo el peso de su mayoría absoluta para, junto a las posiciones conservadoras de CiU y a las vacilaciones del PSOE, descafeinar y dejar sin efecto prácticos las demandas de la misma.

Sin embargo, como decía Ada Nicolau, lo más importante ha sido la verificación que han hecho millones de personas de que "la lucha compensa; que el esfuerzo, primero de unos pocas decenas de afectados y activistas contra la violencia de los desahucios y, luego, la inmensa oleada de apoyo y solidaridad que se ha despertado entre la gente de abajo, no ha sido en vano y que nada pueden las artimañas de bancos y gobiernos contra la voluntad decidida de un pueblo que ha decidido recuperar su dignidad."

El drama de los desahucios y la desesperación extendida entre los afectados y afectadas ha permitido en unos pocos días que millones de personas descubrieran la verdadera faz del régimen en el que hasta ahora confiaban. La vivienda en propiedad ha venido funcionando como uno de los más poderosos resortes de conservadurismo social. Poco ha importado que las rentas salariales se hayan congelado durante más de diez años y luego hayan caído en una devaluación salarial que no parece tener fin; lo que no se conseguía mediante la presión de las luchas sociales, era facilitado al extremo delirante por los créditos a interés negativo y larguísimo plazos de amortización. De ese modo, los bancos se convertían en dueños de los salarios de la gente trabajadora a lo largo de toda su vida; y, con frecuencia, más allá de la duración de la misma. Todo se daba por bien empleado con tal de disponer de ese trozo de espacio al que llamar propio y en el que refugiarse de la miseria material y moral infligida cada día por el trabajo asalariado. Cuando los riesgos de inflación asociados al crecimiento de la burbuja han obligado a la subida de los tipos de interés, estos semipropietarios han despertado de su sueño, descubriendo que ni habían sido propietarios de su vivienda ni lo iban a ser nunca pero que, en cambio, habían quedado atrapados de por vida al pago de una deuda imposible de satisfacer. La indignación primera ha sido rápidamente sustituida por la rabia y el odio contra la casta política que, incrustada en los consejos de administración de las entidades financieras del expolio, no solo no han parado esta locura conducente a su pobreza sino que, en el camino, no han dudado en enriquecerse a costa del sufrimiento y a pobreza de la gente trabajadora.

Familias trabajadoras que se comieron la indemnización para la entrada de la vivienda y que, combinando el trabajo precario con pensiones de jubilación, podían ir haciendo frente a la amortización del préstamo hipotecario, de pronto se han visto empujados a la espiral del paro, la caída de la renta familiar, la incapacidad de hacer frente a los pagos mensuales... hasta llegar al desahucio y la pérdida de la vivienda. Abrumados por la desesperación y, por qué no decirlo, la vergüenza; privados de los lazos de solidaridad y cohesión que eran patrimonio de la antigua clase obrera, no toda la gente afectada ha podido asimilar el brusco paso de la propiedad a la indigencia: algunas de las personas afectadas han optado por el suicidio ante la falta de perspectivas.

Como decía un cartel que había en la Puerta del Sol, los inductores de estos suicidios son reos de delito. No basta con reprobaciones morales, hay que identificar a los responsables de la catástrofe que ha empujado a algunos a

quitarse la vida y a muchos otros a tener que buscarse la vida fuera de su país, de su hogar y de los suyos. Hay que identificarlos y obligarlos a responder por sus tropelías. No puede ser que los autores de esta catástrofe se vayan de rositas y, además, vayan a beneficiarse de la recapitalización de sus bancos con el esfuerzo de varias generaciones de contribuyentes trabajadores. Se lo debemos a los que han perdido su vida y a los que la han visto convertida en un infierno de pobreza y desesperación.

Y, además, la gente perjudicada merece una reparación. Los perjudicados son los que se han citado pero son también y en sobremanera cuantos han visto cerrados sus horizontes vitales por la avaricia y la falta de escrúpulos de una clase dominante.

Somos todos a quienes banqueros y gobernantes nos han privado de nuestra condición de mujeres y hombres libres para embrutecernos con una degradante obsesión por la propiedad que nos ha esclavizado y de la que tenemos que despertar antes de que sea demasiado tarde.

Una nueva marea blanca

El otro frente de lucha está constituido, desde hace meses, por la defensa de los servicios público y, muy en particular, por la defensa de la sanidad contra los designios de los gobiernos del PP de convertirla en un negocio floreciente para amigos e inversores ávidos de ganancias fáciles.

Con frecuencia se han opuesto estas luchas, denominadas luchas por los derechos ciudadanos o sociales, a la tradicional lucha de clases. Sin embargo, cada día de lucha que pasa, se pone en evidencia que la lucha de la sanidad es lucha de clases, es una lucha en torno a la reproducción de la fuerza social de trabajo. El Gobierno y el capital financiero pretenden convertirla en una línea de negocio que atraiga inversores en busca de rentabilidades seguras. La mayoría de la población trabajadora, por su parte, ha comprendido que lo que está en juego va mucho más allá del disfrute de un servicio público, que los ricos quieren cargarse elementos esenciales del pacto por el que en el 78 se les permitió "entrar en el régimen" y considerarles parte de esa "nueva historia" que comenzaba entonces (y que pronto se iba a revelar, en realidad, como continuación de la vieja), a cambio de la constitucionalización de algunos derechos.

La lucha por los derechos constitucionales se convierte, de ese modo, en la continuación de la lucha de clases suspendida en 1978 contra la promesa de consolidar estos derechos de los de abajo junto a los de arriba. Derechos que, andando el tiempo y por efecto de la primacía de los derechos de las corporaciones al Derecho comunitario, sufrirían una auténtica deconstitucionalización, incluso antes de la segunda llegada de la derecha al gobierno. Pero la pelea ahora ya no puede cifrarse en recobrar los derechos perdidos de la Constitución del 78. El contenido de estos derechos, las condiciones de su disfrute, están asociados a una etapa del capitalismo español y global que no volverá. Los derechos de este tiempo son derechos anticapitalistas, derechos contra el capitalismo; son, por eso, derechos transitorios, etapas de una lucha que solo puede terminar con la derrota de unos contendientes. Esta vez no podemos ser derrotados.

El debate sobre el estado de la nación

Luego ha llegado el debate sobre el estado de la nación que en principio parecía venir determinado por la publicación de los papeles de Bárcenas y la insostenible situación de Rajoy y su gobierno. El transcurso del debate no ha confirmado la previsión. El grave estado de crisis de credibilidad del PSOE y su portavoz parece haberle impedido fijar los términos del debate en el terreno que más daño podía hacer a Rajoy. Ha sido el mismo Rubalcaba el que parece haber salido tocado, incapaz de digerir los intentos, seguramente tardías, del PSC por sacar la cabeza de la ambigüedad de su posición ante el impulso por la autodeterminación. Tampoco IU, atada como está a sus

ilusiones de una mejora de sus resultados electorales a corto plazo, ha sido capaz de aprovechar la ocasión para definir una posición de ruptura con el régimen. Solo el representante de ICV y, desde otra posición, la de Upad, han planteado explícitamente el agotamiento del marco constitucional y la necesidad de abrir un período constituyente. La ocasión era inmejorable para ello y es lo que la mayoría de la población movilizada contra las políticas austeritarias está necesitando: una perspectiva política nueva que rompa con las miserias y las iniquidades de la política establecida. Incluso algún gesto, tipo "huida al Aventino"¹, ante las reiteradas chulerías de Rajoy, hubiera dejado en mejor lugar el papel de la izquierda, se supone que ayer especialmente motivada por trasladar el sentimiento de rechazo de la calle a las políticas del PP

23F, marea ciudadana

El 23 de febrero, las calles de muchas ciudades de España se vieron inundadas por una verdadera marea ciudadana para denunciar el carácter de golpe de Estado que atribuimos a las políticas de la troika y sus vicarios en España.

En ciudades sin apenas tradición de movilizaciones ciudadanas, cientos y miles de personas salieron a la calle. Se trata de un movimiento sin precedentes en la historia reciente, un movimiento ciudadano que rechaza explícitamente la política del gobierno y exige la depuración de responsabilidades de ministros y responsables políticos del partido que sostiene al Gobierno

Es algo más, mucho más, que la suma de las distintas mareas plataformas y movimientos que desde hace casi dos años recuperan las calles y espacios públicos para el pueblo frente a la policía, el Estado y los banqueros. Es ese mismo pueblo que se está autoconstruyendo porque se está reconociendo, porque ya no necesita del Estado y sus partidos para conocer, para conocerse. SÍ, SE PUEDE, nosotros que somos el pueblo podemos decidir el rumbo de nuestro destino.

Los comentarios de un consejero del gobierno de la Comunidad de Madrid equiparando esta magna movilización democrática con el siniestro golpe de 1981, del que aún quedan responsabilidades de las más altas instituciones del Estado pendientes de depurar, son equiparables a las de la actual delegada del Gobierno en Madrid que justificó la violencia policial posterior a la manifestación por los "desórdenes de los anti sistema". La táctica de esta señora, antigua militante del partido del asesino de Yolanda González, desde que tomó posesión ha sido, además de ordenar la máxima dureza en la actuación de los antidisturbios cuya disolución debería ser una exigencia de buena salud democrática, imponer el máximo de sanciones posibles para ir erosionando la base de entusiasmo y combatividad que se ha despertado en sectores cada vez más amplios de la población trabajadora.

No es posible participar de la nauseabunda operación de distinción entre "pacíficos manifestantes y violentos anti sistema" con la que políticos y periodistas progresistas se homologan como razonables. Los casi cincuenta detenidos son la gente que no pudo escapar a la violencia de los antidisturbios (?) con "nada más" que un "simple porrazo" o la humillación de estar de cara la pared un buen rato.

Vienen tempos duros y todo apunta que la violencia del Estado se va a golpear con mayor dureza contra quienes osen contestar sus medidas cada vez más brutales y autoritarias. Los detenidos son nuestros, de todos cuantos el 23 F recorrimos las calles gritando y cantando contra la dictadura oligárquica y burocrática que nos sojuzga

Y como telón de fondo, las escandalosas peripecias de la familia Borbón, incluido su jefe, al parecer implicado buscando patrocinadores para eventos deportivos. La propuesta de abdicación del actual titular de la corona, promovida por el primer secretario del PSC, puede ser un balón de oxígeno para una institución del régimen que ha sido clave para su institucionalización y consolidación

Y de cierre, la distancia creciente entre el PSOE y el PSC

El apoyo de trece diputados del PSC al proyecto de resolución presentado en el Congreso instando al Gobierno a posibilitar la celebración de la consulta en Catalunya para que los ciudadanos puedan decidir su futuro, ha abierto una crisis en las relaciones entre el PSOE y el PSC de alcance y consecuencias imprevisibles. En todo caso, una crisis nada favorable para el partido que durante más tiempo ha gestionado el régimen del 78.

Nunca estas relaciones fueron especialmente buenas. Durante todo el período Felipe, el PSC fue permanentemente supeditado a su estrategia de gobernabilidad basada, en buena medida, en una alianza estratégica con el partido de la burguesía catalana, CiU. Durante lustros, esta alianza se ha concretado en un reparto de papeles: el PSOE dejaba a CiU el gobierno de la Generalitat mientras que, contando con el indispensable granero de votos obreros y populares que el aportaba el PSC, él gobernaba el Estado contando, cuando fuera necesario, con el apoyo de CiU, permanentemente elogiado por su "sentido de Estado" y recompensado con algunas prebendas¹.

El impulso por la autodeterminación y el hartazgo de una parte de la militancia y el electorado socialista en Catalunya con las políticas austeritarias del gobierno de CiU, han dado al traste con ese arreglo, ya muy cuestionado desde que el Tribunal Constitucional se hubiera cargado el Estatuto aprobado en referéndum por el pueblo catalán, a pesar del "cepillado" que había sufrido en el Congreso de los Diputados y del que se ufanaba Alfonso Guerra.

De la misma forma que este arreglo fue esencial para la consolidación del régimen del 78 porque permitió restar un enorme caudal de fuerzas al impulso por la autodeterminación en el campo de la izquierda y llevarlo al campo "constitucionalista", su quiebra es una muestra más de la profundidad de la crisis del régimen, esa que no hace tanto algunos calificaban de entelequia.

Si se confirmara y consolidara la separación entre el PSOE y el PSC y éste último se decidiera a escuchar el clamor por la autodeterminación en Catalunya, la crisis del régimen sería irreversible y se abriría una oportunidad para la democracia y el proceso constituyente como no hemos tenido en mucho tiempo.

27/02/2013

1/ Se conoce con esta expresión el abandono del Parlamento por los parlamentarios de la izquierda ante la falta de condiciones mínimas de garantía tras el ascenso de Mussolini al poder.

2/ Como la exclusión del Parque Nacional de Aigües Tortes de la Red de Parques Nacionales, a cambio del apoyo de CiU en alguna votación importante para el gobierno de González